



INFORME

La dotación de personal del Sector Público Nacional

Datos a abril 2025

JUNIO 2025



Email

prensa@centrocepa.com.ar



Web

<https://centrocepa.com.ar/>



Redes sociales

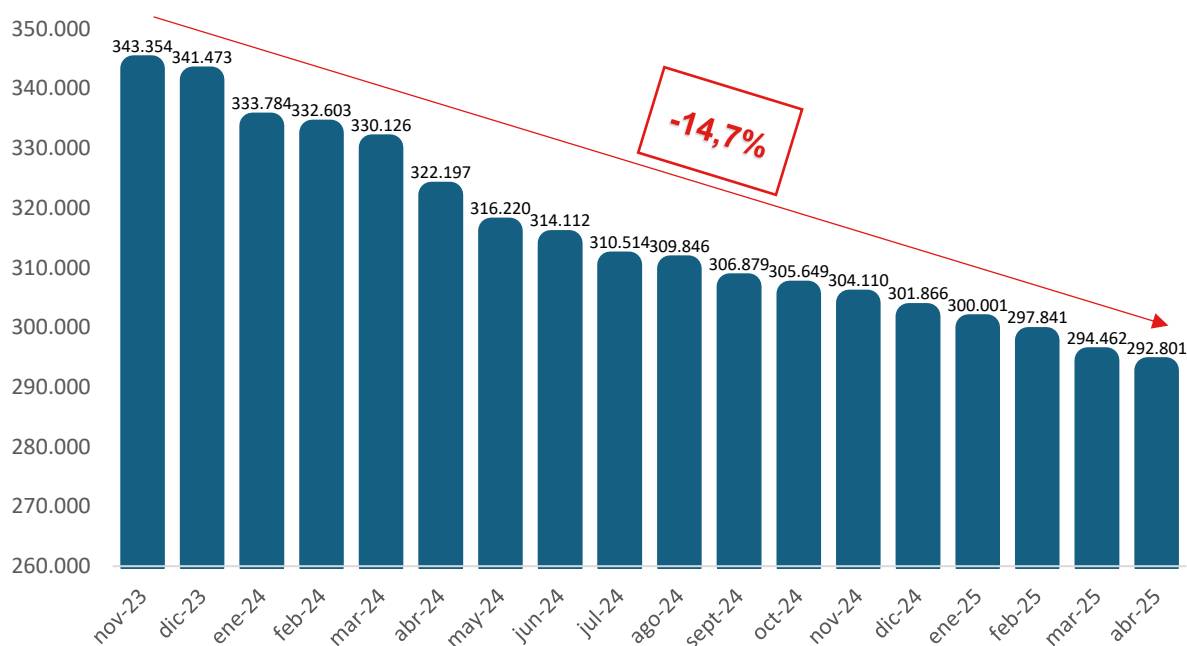
@ctrocepa

Introducción

El presente informe se propone analizar la dinámica de empleo del Sector Público Nacional. Desde su asunción en diciembre de 2023, una de las políticas centrales del gobierno de Javier Milei ha sido el desguace del sector público, ya sean programas u organismos de la Administración Pública Nacional, empresas públicas, o la propia capacidad regulatoria del Estado frente a actores privados.

En ese marco, el gobierno sostiene la necesidad de reducir el tamaño del Estado y, fundamentalmente, ajustar a sus trabajadores. Ello puede confirmarse en el siguiente gráfico donde se observa un recorte persistente en el empleo público nacional durante todos los meses de la gestión libertaria. **Entre noviembre de 2023 y abril de 2025, la dotación de personal se redujo en 50.553 puestos de trabajo, lo que implica una caída del 14,7%.**

Gráfico 1. Dotación de personal de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades del Estado. En cantidad. Noviembre 2023 a abril 2025



Fuente: CEPA en base a INDEC

Analizando por sector, puede observarse que la mayor parte del recorte recae sobre la administración descentralizada (es decir, los organismos o entes públicos que manejan asuntos específicos con autonomía técnica, administrativa y financiera); en segundo y tercer lugar, las empresas del Estado y la administración centralizada (es decir, conjunto de órganos y dependencias que integran directamente al Poder Ejecutivo nacional) respectivamente; y en cuarto y quinto lugar, la administración desconcentrada (es decir, el conjunto de oficinas y delegaciones del gobierno central para ejecutar funciones en diferentes zonas del país) y otros entes respectivamente.

Cuadro 1. Variación de la dotación de personal de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades del Estado. En cantidad y porcentaje.

Noviembre 2023 a abril 2025

Sector	Variación nominal	Variación porcentual
Administración centralizada	-14.703	-26,3%
Administración descentralizada	-15.635	-11,4%
Administración desconcentrada	-2.124	-8,5%
Empresas y sociedades	-16.909	-15,3%
Otros entes	-1.182	-7,6%

Fuente: CEPA en base a INDEC

Análisis por empresas o sociedades

Desde noviembre de 2023, el recorte de personal en el sector público ha sido significativo, afectando especialmente a empresas y organismos estratégicos del Estado. En primer lugar, se encuentra el Correo Argentino, con una pérdida de 4.860 puestos de trabajo, liderando el ranking de despidos, que tiene implicancias profundas ya que el Correo cumple funciones esenciales que van más allá del envío de cartas y paquetes: garantiza la conectividad territorial, presta servicios en zonas donde los operadores privados no llegan y actúa como soporte logístico del Estado, incluyendo tareas clave como la distribución de DNI, medicamentos, materiales educativos, y el desarrollo de procesos electorales en todo el país.

Le siguen Aerolíneas Argentinas, con 1.745 puestos de trabajo menos, en el marco de un proceso de achicamiento que afecta no solo al personal sino también a rutas estratégicas que garantizan la conectividad federal del país. En AySA, la empresa responsable del suministro de agua potable y saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires, se registraron 1.548 despidos, lo que pone en riesgo la capacidad operativa de un servicio esencial para millones de personas. Por su parte, la ex Télam, agencia nacional de noticias, fue virtualmente desmantelada con la desvinculación de 644 trabajadores, lo que representa un ataque directo a la pluralidad informativa y a la capacidad del Estado de producir contenidos propios con mirada federal y soberana.

Un caso que merece especial atención es el del Banco Nación, donde se registraron 1.517 despidos en un contexto en el que el Gobierno ha manifestado abiertamente su intención de avanzar hacia su privatización. En paralelo, el sistema ferroviario nacional también sufre un profundo desguace: la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado perdió 1.906 empleos, mientras que Belgrano Cargas y Logística recortó otros 333. Reducir personal en las empresas ferroviarias estatales implica mucho más que un ajuste presupuestario. Tiene consecuencias directas sobre la calidad y alcance del servicio, ya que menos trabajadores significan, en muchos casos, una menor

frecuencia de trenes, rutas canceladas y un deterioro en las condiciones de mantenimiento, limpieza, atención al usuario y seguridad operacional. El recorte no solo limita la capacidad operativa del sistema, sino que también genera una pérdida de saberes técnicos y experiencia acumulada a lo largo de años, difícil de reemplazar en el corto plazo.

Estos datos no solo reflejan una política de ajuste, sino también un cambio de rumbo en la visión del rol del Estado, con impactos concretos sobre miles de trabajadores y sobre sectores clave para la infraestructura y el desarrollo del país.

Gráfico 2. Variación de la dotación de personal de las diez empresas o sociedades del Estado con mayor ajuste en cantidades. Noviembre 2023 a abril 2025



Fuente: CEPA en base a INDEC

Al analizar la reducción de personal en términos porcentuales —es decir, en relación con la dotación total de cada organismo o empresa—, el caso más extremo es el de la ex Télam, donde el recorte alcanzó casi el 80% del personal, llevándola a un punto de virtual extinción operativa y simbólica como agencia nacional de noticias. Esta cifra no solo refleja un ajuste profundo, sino una decisión política orientada a desarticular la capacidad del Estado de comunicar con perspectiva federal, plural y pública.

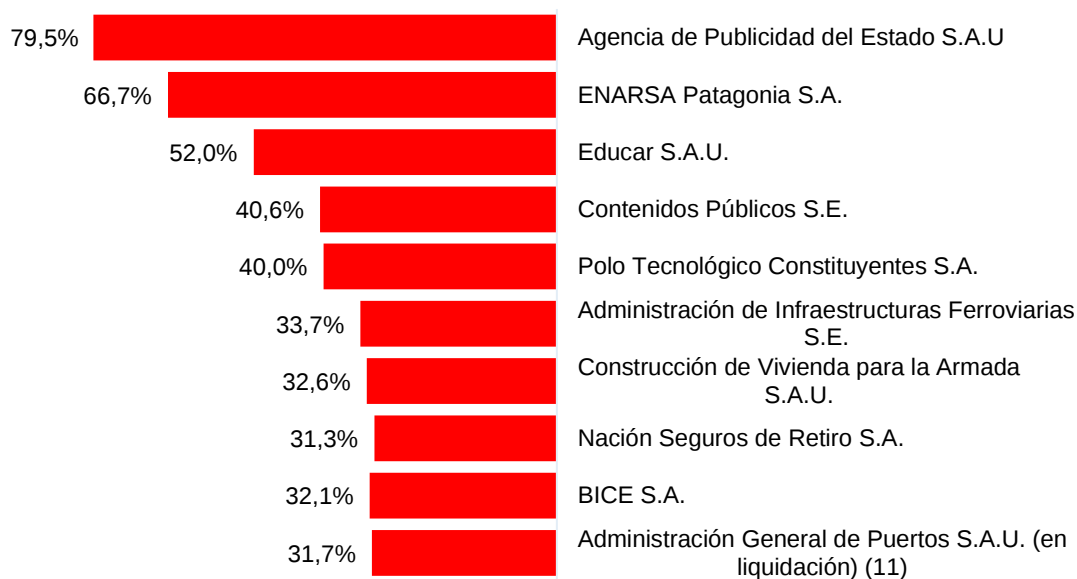
En segundo lugar, se ubica la empresa energética ENARSA Patagonia, también con una reducción drástica de su planta, lo que debilita la presencia estatal en el desarrollo y planificación energética en la región sur del país. Le siguen, en tercer y cuarto lugar, las empresas vinculadas a la educación y la producción de contenidos: Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., ambas afectadas por recortes significativos que limitan el

acceso a herramientas pedagógicas, digitales y audiovisuales que han sido clave en la democratización del conocimiento y la cultura en los últimos años.

También sobresale el vaciamiento de empresas tecnológicas y de infraestructura estratégica. El Polo Tecnológico Constituyentes sufrió una pérdida del 40% de su personal, lo que representa un retroceso en la capacidad estatal para sostener desarrollos científicos e innovaciones tecnológicas. La Administración General de Puertos y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias registraron recortes del 32% y 34% respectivamente, afectando áreas clave para el comercio exterior, la logística nacional y la planificación del transporte. En el sector asegurador, Nación Seguros perdió el 31% de su planta, debilitando la presencia estatal en un sector que permite ofrecer cobertura a ciudadanos y organismos públicos en condiciones accesibles y con criterios de interés social.

Este análisis porcentual permite dimensionar no solo el volumen de los despidos, sino también la profundidad del repliegue estatal en sectores estratégicos para la soberanía, el desarrollo productivo, la educación pública y la integración territorial.

Gráfico 3. Variación de la dotación de personal de las diez empresas o sociedades del Estado con mayor ajuste en porcentaje. Noviembre 2023 a abril 2025



Fuente: CEPA en base a INDEC

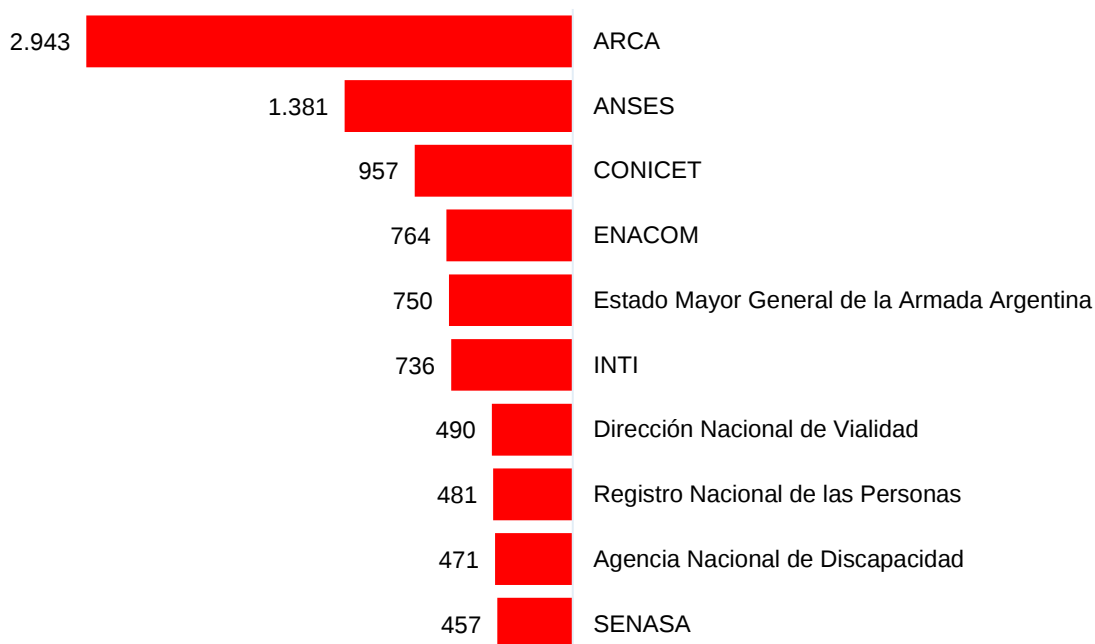
En el ámbito de la Administración Pública Nacional (APN), la mayor reducción nominal de personal se produjo en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) — ex AFIP—, con un recorte de 2.943 puestos de trabajo. Este ajuste masivo en el principal organismo de fiscalización tributaria y aduanera del país compromete seriamente su capacidad para combatir la evasión fiscal, controlar el comercio exterior y garantizar la recaudación que sostiene las políticas públicas.

También destacan los recortes en organismos técnicos y científicos fundamentales para el desarrollo estratégico nacional. El CONICET, principal institución dedicada a la investigación científica y tecnológica, sufrió una reducción de 957 trabajadores, lo que afecta directamente la producción de conocimiento y la continuidad de proyectos de investigación de largo plazo. El ENACOM, ente encargado de regular las comunicaciones, perdió 764 empleados, debilitando el control del espectro radioeléctrico, la fiscalización de servicios de telecomunicaciones y las políticas de conectividad. Por su parte, el INTI, clave en la innovación industrial y el apoyo a las pymes, sufrió un recorte de 736 trabajadores, mientras que el SENASA, organismo central en el control sanitario y la trazabilidad de productos agroalimentarios, perdió 457 puestos, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria y las exportaciones del sector agroindustrial.

En el plano social y previsional, también se observaron recortes significativos. La ANSES, pilar del sistema de seguridad social y responsable de la administración de jubilaciones, pensiones y asignaciones, perdió 1.381 trabajadores, afectando la atención al público y la capacidad de gestión de trámites clave para millones de ciudadanos. A su vez, la Agencia Nacional de Discapacidad sufrió la desvinculación de 471 trabajadores, lo que representa un serio retroceso en la garantía de derechos y en el acompañamiento a personas con discapacidad en todo el país.

Estos recortes no solo suponen un ajuste fiscal, sino una redefinición del rol del Estado en áreas críticas como la ciencia, la salud, la industria, la inclusión social y la soberanía económica. La magnitud y el perfil de los despidos reflejan una política sistemática de debilitamiento institucional que compromete la capacidad del Estado para intervenir en el desarrollo y garantizar derechos.

Gráfico 4. Variación de la dotación de personal de la Administración Pública Nacional desconcentrada y descentralizada con mayor ajuste en cantidades.
Noviembre 2023 a abril 2025



Fuente: CEPA en base a INDEC

Al observar la reducción de personal en términos porcentuales —es decir, en relación con la cantidad total de trabajadores de cada organismo— surgen casos particularmente alarmantes por la magnitud del ajuste y el rol estratégico de las instituciones afectadas. En primer lugar, se destaca el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que sufrió una caída del 64% de su planta, lo cual representa un desmantelamiento virtual de un organismo clave para la articulación de políticas públicas dirigidas a los sectores más vulnerables. Su debilitamiento implica una fuerte retracción del Estado en su capacidad de planificar, monitorear e integrar acciones sociales con enfoque territorial e interinstitucional.

En segundo lugar, se encuentra la Junta de Seguridad en el Transporte, con una reducción del 44%, lo que compromete seriamente su función esencial de investigar accidentes e incidentes en los distintos modos de transporte —aéreo, ferroviario, automotor y fluvial—, y generar recomendaciones para mejorar la seguridad operativa. Le sigue la Agencia de Desarrollo e Innovación Tecnológica, con una merma del 38% de su personal, lo que afecta directamente las capacidades estatales para fomentar el desarrollo científico-tecnológico, acompañar proyectos estratégicos y promover la articulación entre el sistema científico y el sector productivo.

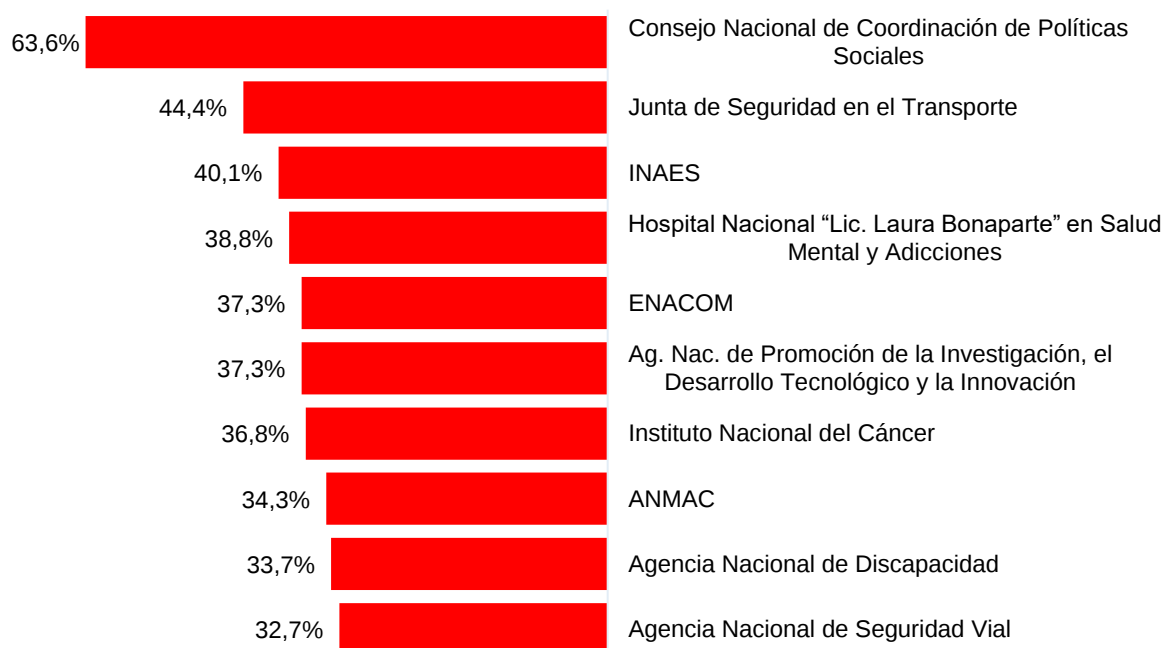
Particularmente sensibles resultan los recortes en organismos vinculados a la salud pública, un área cuya fragilidad se ha evidenciado con crudeza en los últimos años. El Instituto Nacional del Cáncer y el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte” registraron una caída del 39% en su

dotación de personal, lo que representa un severo retroceso en políticas públicas orientadas al tratamiento integral del cáncer y a la atención de la salud mental, áreas que requieren equipos multidisciplinarios, continuidad en la atención y una fuerte presencia estatal.

Asimismo, se consolida el ajuste en el ámbito de la discapacidad, con una reducción del 32% del personal en la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que implica un debilitamiento estructural en la capacidad del Estado para garantizar derechos, accesibilidad, prestaciones y acompañamiento a una población históricamente postergada.

Estos recortes, medidos en términos proporcionales, permiten dimensionar con mayor precisión no solo la magnitud del ajuste, sino también su orientación política: un retiro del Estado de áreas vinculadas a la ciencia, la salud, la seguridad y las políticas sociales, que deja a vastos sectores de la sociedad sin respaldo institucional y debilita el entramado público que sostiene derechos fundamentales.

Gráfico 5. Variación de la dotación de personal de la Administración Pública Nacional desconcentrada y descentralizada con mayor ajuste en porcentaje. Noviembre 2023 a abril 2025



Fuente: CEPA en base a INDEC

Conclusiones

El análisis de la evolución del empleo en el Sector Público Nacional desde noviembre de 2023 hasta abril de 2025 permite afirmar que el gobierno de Javier Milei ha impulsado un ajuste de gran envergadura, que supera los 50 mil despidos y afecta de forma estructural la presencia del Estado en áreas clave. Lejos de tratarse de un proceso aislado o limitado a la “reducción de cargos innecesarios”, el recorte constituye una política sistemática y transversal que impacta tanto a la administración pública como a las empresas estatales y organismos descentralizados.

Desde una perspectiva cuantitativa, se observa una caída del 14,7% en el total de trabajadores del sector público nacional, siendo las empresas estatales y los entes descentralizados los más afectados en términos absolutos. Pero si se analiza el recorte en relación al tamaño de cada organismo, los datos revelan un patrón aún más preocupante: la virtual desaparición de instituciones enteras como la ex Télam, Educar S.A., el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, o el Instituto Nacional del Cáncer.

En términos cualitativos, el ajuste se concentra en organismos estratégicos para el desarrollo del país y para la garantía de derechos: ciencia y tecnología (CONICET, INTI, ENARSA), salud pública (INCA, Hospital Bonaparte), educación y cultura (Educar S.A., Contenidos Públicos), inclusión social (ANSES, ANDIS), infraestructura y transporte (empresas ferroviarias, administración portuaria), seguridad operacional (Junta de Seguridad en el Transporte), y recaudación fiscal (ARCA).

El impacto es doble: por un lado, el despido de miles de trabajadores y trabajadoras que pierden su fuente laboral y con ella, su sustento y experiencia acumulada; por el otro, una pérdida para toda la sociedad, que ve deteriorarse la capacidad del Estado de intervenir, planificar, prestar servicios, generar conocimiento, integrar el territorio, garantizar seguridad, comunicar de forma soberana y promover el desarrollo.

En definitiva, el ajuste no solo refleja una búsqueda de equilibrio fiscal, sino un cambio profundo en la concepción del rol del Estado. La contracción de sus capacidades institucionales no es un efecto colateral, sino un objetivo buscado: un Estado más pequeño, más débil y menos presente. Las consecuencias de este modelo no son neutras ni reversibles en el corto plazo: afectan la cohesión social, el tejido productivo, la equidad territorial y el desarrollo de mediano y largo plazo. La reconstrucción de estas capacidades será, sin duda, uno de los grandes desafíos que enfrentará la Argentina en los años venideros.



CONTACTANOS



Email

prensa@centrocepa.com.ar



Web

<https://centrocepa.com.ar/>



Redes sociales

@ctrocepa